

**JUZGADO TERCERO DE DESCONGESTION CIVIL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE MOCOA**

219

San Miguel de Agreda de Mocoa, veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

ST-00074/17

I. OBJETO E IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES QUE INTERVIENEN

Tipo De Proceso	DE RESTITUCION Y/O FORMALIZACION DE TIERRAS
Radicación	860013121001-2016-00381-00
Solicitante	Maria Florentina Burbano Chicangana – C.C. No. 41.108.234
Ubicación del Predio	Vereda Los Ángeles, Municipio de Valle de Guamúz, Putumayo.
Tipo del Predio	Rural
Asunto	Sentencia No. 00074

II. ANTECEDENTES

Habiéndose agotado las etapas propias del proceso de Solicitud Judicial de Restitución de Tierras, adelantado por la parte solicitante, a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, pasa a proferirse sentencia dentro del presente asunto.

1. HECHOS RELEVANTES

1.1. Respecto de la individualización y caracterización del predio objeto de la solicitud

De Restitución: De conformidad con la información que yace en la solicitud, se individualiza el predio objeto de restitución de la siguiente manera:

TIPO / NOMBRE DEL PREDIO	FOLIO DE MAT.INMO BILIARIA	CEDULA CATASTRAL	AREA PREDIO	NOMBRE DEL TITULAR EN CATASTRO	RELACION JURIDICA CON EL PREDIO
N/R	442-71158 a nombre de la Nación	86-865 00-02-0001-0630-000	4Has 4007M ²	Marleny Flor Gelpud y Sigifredo Pantoja Aguirre	OCUPANTE
DIRECCION Y/O UBICACIÓN DEL PREDIO: RURAL SIN DENOMINACIÓN, VEREDA LOS ANGELES, MUNICIPIO DE VALLE DE GUAMUEZ, PUTUMAYO					
INFORMACION DEL SOLICITANTE: MARIA FLORENTINA BURBANO CHICANGANA C.C. No. 41.108.234					
NUCLEO FAMILIAR	NOMBRE		IDENTIFICACION	PARENTESCO	PRESENTE AL MOMENTO DE LA VICTIMIZACION
	YENI PAOLA QUENGUAN BURBANO		1.126.450.299	HIJA	SI
	EDWIN ALEXANDER QUENGUAN BURBANO		99072312623	HIJO	SI
	JEIMER ALEJANDRO QUENGUAN BURBANO		1.193.120.811	HIJO	SI
	WILMAR IVAN QUENGUAN BURBANO		1.124.864.323	HIJO	SI
	LUIS ALBERTO QUENGUAN BURBANO		1.126.456.020	HIJO	SI
COORDENADAS DEL PREDIO					
PUNTO_ID	LATITUD		LONGITUD		
75188	0° 28' 31,201" N		77° 0' 33,010" W		
75189	0° 28' 29,607" N		77° 0' 32,628" W		

75190	0° 28' 28,686" N	77° 0' 29,711" W
75191	0° 28' 26,770" N	77° 0' 30,957" W
75192	0° 28' 25,492" N	77° 0' 27,637" W
75193	0° 28' 21,970" N	77° 0' 29,381" W
75194	0° 28' 23,340" N	77° 0' 34,250" W
75195	0° 28' 24,969" N	77° 0' 37,874" W
LINDEROS Y COLINDANCIAS		
NORTE	Partiendo desde el punto 75188 en dirección oriente, pasando por los puntos 75189, 75190, 75191 en una distancia de 325,54mts, hasta llegar al punto 75192 con predios del señor ENRIQUE MALES.	
ORIENTE	Partiendo desde el punto 75192 en línea recta en dirección sur, en una distancia de 121,03 mts, hasta llegar al punto 75193 con predios de la señora ROSA AMALIA CHAVEZ.	
SUR	Partiendo desde el punto 75193 en dirección occidente, pasando por el punto 75194 en una distancia de 279.41 mts, hasta llegar al punto 75195 con predios de la señora TABITA ELSA PINCHAO.	
OCCIDENTE	Partiendo desde el punto 75195 en línea recta en dirección norte, en una distancia de 243,73mts, hasta llegar al punto 75188 con predios de CAMINO REAL AL GUISIA.	

1.2. Respeto de la adquisición del predio objeto de la solicitud: La señora Maria Florentina Burbano, manifiesta que el predio lo adquirió a través de un contrato verbal realizado en el año de 1995 con el señor Sigifredo Pantoja, la forma de pago acordada en un primer momento fue con trabajo y (dos) \$2.000.000 millones de pesos en efectivo, posteriormente, el 13 de agosto de 2008, firmaron contrato de compraventa¹ del cual se hizo parte a la señora Marleny Flor de Maria Gelpud quien figuraba como dueña de una parte de la finca producto de una herencia y de la otra parte el señor Sigifredo Pantoja, sin embargo nunca fue formalizado ante las entidades respectivas. Terreno, que lo utilizó para construir una casa de madera para vivir, y para el cultivo de pastos, chiro y plátano como también para la ganadería.

1.3. Respeto de los hechos motivos del desplazamiento forzado: Respeto al desplazamiento y abandono del predio, narra la solicitante, que el 2 de septiembre de 2009, un grupo al margen de la ley llego a su casa portando armas de fuego y ropa camuflada del ejército y solicitaron que salga el señor Jose Francisco Quenguan (Q.E.P.D) esposo de la solicitante, a quien sin motivo ni razón alguna le propinaron 3 tiros en su cabeza provocándole de inmediato su muerte, hecho que fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes y se realizó las respectivas honras fúnebres en el cementerio del Placer, motivo por el cual, según la hoy solicitante, por buscar su seguridad de su núcleo familiar y por el simple hecho de conservar su vida, decidió huir y abandonar su hogar y se instalaron en Orito (P), lugar en el que vivieron por el periodo de un (1) año. En el año 2010 retorno a vivir a la Vereda los Ángeles, en un rancho pequeño que la junta de acción comunal le cedió mas a no a su predio del cual solo pasa a vigilarlo.

III. PRETENSIONES

A través de la solicitud que hiciera la señora Maria Florentina Burbano, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras despojadas a través de apoderado judicial designado por la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras, busca obtener como pretensiones principales las siguientes:

1. Se solicita que se proteja el derecho fundamental a la Formalización y/o Restitución de Tierras de los solicitantes, en su calidad de víctimas y ocupantes, así mismo, se den las órdenes enunciadas en el artículos 72, 91 y 121 de la Ley 1448 de 2011, ello en cumplimiento del deber de garantizar la prevalencia de los derechos de aquel y del derecho de retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad.

¹ Folios 103 a 104

220

2. Que se declaren todas las medidas de reparación, cautelares y satisfacción integral a favor de las víctimas del conflicto armado interno contenidas en el título IV de la ley 1448 de 2011, considerándose entre ellas el alivio de pasivos por concepto de impuestos prediales, tasas y otras contribuciones, al igual que las deudas por concepto de servicios públicos domiciliarios, por concepto de pasivos financieros de carteras con entidades vigiladas por la Superfinanciera de Colombia, constituir el predio en patrimonio de familia, tener acceso a los servicios públicos y las demás generadas de la restitución jurídica del predio solicitado con el objeto de procurar el goce efectivo de los derechos del solicitante.
3. Todo ello en el marco de la correspondiente gratuidad y prevalencia de derechos en favor de quien solicita la protección y restitución de sus derechos civiles.
4. De conformidad con el artículo 117, se solicita se concedan pretensiones encaminadas a la estabilización socioeconómica de la señora Maria Florentina Burbano, desde la perspectiva de un enfoque diferencial por ser mujer rural.

IV. ACTUACION PROCESAL:

Una vez verificadas las correspondientes actuaciones administrativas, en especial aquella de que trata el inciso 5 del art. 76 de la Ley 1448 de 2011, y de que se cumplieran los demás requisitos de procedibilidad se procedió como a continuación se resume:

Se admitió la solicitud presentada el 14 de diciembre de 2016, mediante providencia adiada 27 de abril de 2017², dándose cumplimiento a las órdenes de notificación allí impartidas el 08 de mayo del mismo año³ junto con la respectiva publicación en el Diario El Tiempo el 21 de mayo de 2017⁴, así mismo mediante oficios respectivos se notificó a las demás autoridades y entidades que participan dentro del proceso. El INCODER, hoy AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS –ANT., de forma extemporánea manifestando que en su base de datos no se reportan procedimientos administrativos asociados al predio solicitado en restitución, sin que presente oposición alguna a la adjudicación del predio objeto de restitución y/o formalización, razón por la cual no se procedió al estudio de la misma por la Judicatura⁵. A folio 166 se deja constancia secretarial que se le notificó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, transcurriendo el traslado en silencio.

No obstante, pese a que en su debido momento se hizo las correspondientes notificaciones tal y como se mencionó líneas arriba, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa (P), partiendo del entendido que el predio del proceso que nos ocupa se encuentra inmerso en una zona de reserva forestal de la Amazonia constituida por la Ley 2^{da} de 1959, ordena a la UAEGRTD tanto general como territorial Putumayo presentar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la sustracción de los predios reclamados y mencionados en dicho auto, o del área en que estos se encuentran ubicados, así como también se ordenó la suspensión de tales procesos que se adelantaron hasta antes de dictar fallo.

Dicho acto administrativo⁶ ya había sido anexado al plenario junto con la solicitud de Restitución de Tierras, mismo que fue objeto de estudio por este despacho y que da cuenta que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución No. 1517 de 14 de septiembre de 2016, mediante la cual se resuelve sustraer de manera definitiva del área de Reserva Forestal de la Amazonia solicitada, localizadas en jurisdicción de las veredas El Placer, Los Ángeles, Mundo Nuevo

² Folios 138 - 139.

³ Folio 140

⁴ Folio 150

⁵ Folio 163

⁶ Folio 108 a 115.

y la Esmeralda del municipio de Valle del Guamuez (P), para la restitución jurídica y material de las tierras a las víctimas, en el marco de la Ley 1448 de 2011.

Vencidos los términos de traslado, el proceso se abre a pruebas mediante proveído de 28 de julio del 2017⁷ teniendo como pruebas las aportadas junto con la solicitud y decretándose pruebas de oficio, no obstante frente a la solicitud hecha por el agente del Ministerio Público frente a la recepción de testimonios de los señores Ramon Meneses y Rosalba Burbano, no se hizo necesario su recaudo toda vez que se consideró suficiente con el acervo probatorio aportado al plenario que permiten resolver el objeto de la Litis, seguido, el Juzgado de origen remite para descongestión mediante auto de sustanciación No. 00636 con fecha de 03 de noviembre de 2017, pronunciamiento en el cual ordena culminar la etapa probatoria y corre traslado al ministerio público el termino de cinco (05) días para que presente concepto, periodo que culmino el quince (15) de noviembre de la corriente anualidad en silencio.

V. CONSIDERACIONES:

5.1. Presupuestos Adjetivos:

Este Juzgado es competente de conformidad con lo que viene establecido en los artículos 79 y 80 de la Ley 1448 de 2011, la parte solicitante se encuentra legitimada y debidamente representada⁸ así como se encuentra presentada la demanda en legal forma de conformidad con lo que viene normado por el los artículo 71 y ss y el artículo 84 de la Ley 1448 de 2011.

También encuentra acreditado dentro del proceso que se cumple el principio de procedibilidad de que trata el artículo 76 de la Ley 1448, toda vez que la señora MARIA FLORENTINA BURBANO CHINCANGANA, se encuentra incluida en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en calidad de víctima de abandono forzado, esto tal como se evidencia a folios 123 del expediente donde obra constancia CP 00918 del 09 de diciembre de 2016, que así lo confirma.

5.2. Problema Jurídico:

Tiene derecho la solicitante, señora Maria Florentina Burbano Chicangana, a ser reparada de manera integral, a obtener la tutela de su derecho fundamental a la restitución de tierras y a serle restituido y formalizado el predio rural sin denominación ubicado en la Vereda Los Ángeles, en el municipio de Valle del Guamúez, Departamento del Putumayo, del cual es Ocupante?

Para responder y dar solución a la anterior formulación, se tendrán en cuenta las condiciones relacionadas con los hechos de violencia que afectaron la zona donde se encuentra ubicado el predio, la calidad de víctima del solicitante, su situación como ocupante del bien y las razones que dieron lugar al abandono del predio de la solicitante que se encuentren acreditadas dentro el trámite administrativo y judicial.

5.3. Marco jurídico y conceptual:

La Restitución de Tierras despojadas o abandonadas en Colombia, viene como Instrumento resultante de un proceso evolutivo de los fenómenos sociales que de manera generalizada afectan sectores más vulnerables, fundamentado en normas constitucionales e internacionales y nutrida con las tendencias normativas y herramientas de protección, que han venido aterrizándose sobre la temática referente a la reparación y protección de las víctimas del conflicto armado, a través de un

⁷ Folio 167 a 168

⁸ Folios 125 - 126

proceso histórico de adaptación e implementación de las herramientas legales, administrativas y judiciales puestas a disposición de la población afectada, víctima del conflicto armado en Colombia, observando estrictamente criterios de justicia y equidad bajo la óptica del enfoque diferencial a fin de proteger real y efectivamente a los sectores más vulnerables.

Múltiples y reiterados han sido los pronunciamientos de nuestro máximo órgano constitucional, que han decantado las teorías referentes a individualización, conceptualización, fundamentación legitimación y resolución de los conflictos que afectan directamente a las víctimas del conflicto armado colombiano, el despacho acoge los criterios que claramente decanta la sentencia reciente T-315 de 2016 que recorre no sólo los aspectos adjetivos y de implementación más destacados si no que ahonda en resaltar su esencia, finalidad y la importancia del rol del juez de Restitución en la Búsqueda de una paz estable y duradera:

(...) 4.1. El diseño del proceso de restitución de tierras contemplado por la Ley 1448 de 2011 constituye en gran medida un reconocimiento a las formas propias que, en el contexto de la violencia rural, adoptó el abandono forzado de aquellas,⁹ así como la multiplicidad de dinámicas de usurpación y de despojo tanto material como jurídico que han tenido lugar en la compleja realidad histórica del conflicto armado interno colombiano. En relación con ello, vale la pena reproducir un conjunto de reflexiones vertidas en el Informe de Ponencia para Primer Debate del Proyecto que posteriormente se convirtió en la denominada Ley de Víctimas:

"[...] Cerca de 750.000 hogares campesinos fueron desplazados de sus territorios por la fuerza en las últimas dos décadas, de los cuales 460.000 abandonaron un poco más de tres millones de hectáreas. De las tierras abandonadas, una parte permanece así, otra está cuidada por parientes o vecinos, o ha sido repoblada con campesinos a quienes los jefes armados adjudicaron tierras despojadas y otra parte fue transferida de hecho o de derecho a terceros, generalmente personas sin conexión aparente con los victimarios.

El despojo asumió varias modalidades, desde las compras forzadas a menor valor hasta el destierro, la usurpación física de la posesión y la destrucción de las viviendas y cercas que delimitaban los predios. El despojo de tierras fue legalizado, muchas veces, con transferencias forzadas, con la participación de notarios y registradores, y el rastro de los despojadores fue borrado por testaferreros y múltiples traspasos a terceros de aparente buena fe.

Otras veces el despojo afectó derechos de tenencia y posesión, interrumpiendo el término de prescripción, y terceros obtuvieron títulos de adjudicación o titularon por vía judicial a su favor. En ocasiones el INCORA o el INCODER declararon caducados los títulos de beneficiarios de reforma agraria cuando se desplazaron y readjudicaron las parcelas a otras personas. Otras veces el IGAC englobó los predios despojados en otro mayor, alterando el catastro para desaparecer la cédula catastral de los despojados.

(...) 4.2. En efecto, aquellas situaciones llevaron a repensar las estructuras procesales típicamente civiles, en procura de crear medidas excepcionales para ofrecer respuestas reales a las víctimas del conflicto en el marco de un proceso transicional de tierras, en el cual la restitución actuase como un componente preferencial y esencial del derecho a la reparación integral.

⁹ En la sentencia C-715 de 2012, la Corte, entre otros asuntos debió definir si el Legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al prever un conjunto de medidas para el despojo y no para el abandono forzado de predios, según la lectura que los demandantes hacían del artículo 74 de la Ley de víctimas y restitución de tierras, y de otras normas que giraban en torno al concepto de ‘despojo de tierras’. La Corte consideró que, con independencia de las relevantes discusiones teóricas y sociales acerca de las tipologías de estos fenómenos, las medidas legislativas dictadas en respuesta al despojo son también aplicables al abandono de tierras: “Para la Corte, si bien los conceptos de abandono y despojo son fenómenos distintos, es claro que ambos producen la expulsión de la tierra de las víctimas, lo que genera una vulneración masiva de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto interno, razón por la cual esta Corporación en múltiples y reiteradas ocasiones ha reconocido normativa y jurisprudencialmente a las víctimas de despojo y abandono sin ninguna distinción, como sucede con la definición del delito de desplazamiento forzado. En este orden, la Ley 1448 de 2011 y especialmente los artículos que ahora se demandan –arts. 28 y 72– dejan ver el carácter asimilable de las víctimas de despojo, de usurpación y de abandono forzado de tierras, de tal manera que ambas son incluidas y tenidas en cuenta por el Legislador en el marco de la Ley 1448 de 2011”.

4.2.1. Precisamente por las especificidades de la tipología del despojo, el abandono y la usurpación, una adecuada comprensión de la restitución y, en particular de la restitución de tierras exigió del legislador la construcción de un conjunto de medidas administrativas y judiciales de carácter extraordinario que hoy constituyen la denominada acción de restitución, cuyo propósito es el “restablecimiento de la situación anterior a las violaciones [sufridas como consecuencia del conflicto armado interno]” y subsidiariamente, cuando ello no fuere posible, la compensación.

4.3. En efecto, el proceso de restitución de tierras, tal y como está contemplado por la Ley 1448 de 2011, se compone de una etapa inicial o administrativa, a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y otra fase secundaria o judicial, en cabeza de los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras.

(...) 4.3.3. Aunque el proceso de restitución es de única instancia y ello se ha considerado como constitucionalmente válido,¹⁰ a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de procesos judiciales, donde la litis concluye con la ejecutoria de la última decisión adoptada, en el proceso citado, el legislador previó una competencia *ius fundamental* extendida. En otras palabras, “el Juez o Magistrado [mantiene la] competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, prosiguiéndose dentro del mismo expediente las medidas de ejecución de la sentencia”. En ese sentido, el proceso sólo acaba cuando efectivamente se hubiesen cumplido todas las órdenes de protección y restitución contenidas en el fallo.

4.3.4. Con todo y lo anterior, la competencia del juez de restitución puede ir más allá. En efecto, el artículo 102 de la Ley 1448 de 2011, permite al funcionario judicial conservar su competencia después de la sentencia “(...) para dictar todas aquellas medidas que, según fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposición de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias.” Lo anterior implica que aun cuando en la sentencia no se haya dado una orden precisa, el juez pueda emitir nuevas y posteriores órdenes con el propósito de proteger los derechos fundamentales de los reclamantes, particularmente, los vinculados a la restitución, posibilidad que está en consonancia con los principios de estabilización y seguridad jurídica contemplados por el artículo 73 de la misma Ley.

4.3.5. En síntesis, dichas facultades ulteriores al fallo de restitución no son sólo entonces poderes judiciales de ejecución; también consisten en la posibilidad que tiene el juez de crear nuevos remedios jurídicos para asegurar que el proceso de restitución de tierras cumpla sus propósitos constitucionales y en el marco de la “(...) justicia transicional [sea] un [verdadero] elemento impulsor de la paz”, tal como lo ha sostenido esta Corporación. Concedido esto, se trata entonces de dos competencias *ius fundamentales* extendidas distintas del juez de restitución de tierras, de un lado, se tiene la **competencia para ejecutar** las órdenes dadas en la sentencia y, de otro, la **competencia para emitir nuevas órdenes** en procura de garantizar la estabilización y seguridad jurídica de la restitución.

(...) 4.4.1. En efecto, los altos valores jurídicos que se defienden en el proceso de restitución, se proyectan directamente sobre la labor de los jueces de tierras y sus amplísimas facultades dentro del mismo como un trámite integral, que no sólo pretende definir la relación jurídica existente entre el reclamante y su predio sino que además, está tras la búsqueda proporcional de alivios materiales a las violaciones de derechos fundamentales particularmente intensas que ocurren como consecuencia del desarraigo y la indignidad ocurrida por efecto del desplazamiento forzado. Por tal motivo, no resulta extraño que el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 fije el derecho a la reparación integral de manera diferenciada, transformadora y efectiva; y bajo dimensiones individuales, colectivas, materiales, morales y simbólicas.

4.4.1.1. Justamente, en relación con dichas dimensiones, cabe indicar que en el proceso de restitución, además del restablecimiento de las condiciones jurídicas y materiales del reclamante, resultan comprometidos una amplia gama de intereses que, si bien no tienen un origen estricto en la comprensión individual de la situación del peticionario, sí se constituyen en circunstancias y agentes externos que tienen la potencia suficiente de impedir el retorno efectivo de la población desplazada y, en ese sentido, de reproducir la conflictividad social.

4.4.2. Es por tal motivo, que los jueces de restitución no son en estricto sentido sólo jueces de tierras. En el marco de una visión teleológica e integral del proceso, tienen la responsabilidad de ajustar sus actuaciones al

¹⁰ En sentencia C-099 de 2013, se consideró razonable esta previsión normativa al ponderar la limitación que entraña la ausencia de una instancia de revisión, con la finalidad constitucionalmente válida perseguida por la norma. Adicionalmente, explicó que el derecho de contradicción, en particular, y el debido proceso en general se encuentran garantizados por la estructura misma del procedimiento de restitución.

222

"(...) objetivo primordial de conseguir la reconciliación y la paz duradera y estable" que, con independencia del esclarecimiento de la titularidad jurídica del predio restituido, debe involucrar también aquellas intervenciones que siendo visibles en el proceso pueden comprometer otras vulneraciones distintas de derechos fundamentales a las alegadas por las víctimas solicitantes y que, de no gestionarse adecuadamente, imposibilitarían el cumplimiento de los propósitos transicionales de restitución.

Es así como se trabaja día a día en nuestro país en esa búsqueda de verdad, justicia y reparación con la utilización de cada vez novedosos y mejores instrumentos judiciales para poder resarcir de manera más justa, eficaz y completa las afectaciones derivadas de un contexto de violencia que ha golpeado las bases más sensibles y vulnerables de nuestra sociedad, el campesinado, la infancia, mujeres y madres trabajadoras, cabezas de hogar, etc., golpes que si bien han dejado huella de dolor destierro, discriminación y olvido y que esta misma no se borra, por cuanto además debe ser recordada como símbolo de perdón y fortalecimiento tampoco debe ser estigma que impida la resocialización la convivencia, la reintegración a las labores de los campesinos en sus tierras, la paz.

Enfoque Diferencial aplicado a La Política de Restitución De Tierras

La situación de crímenes atroces, de lesa humanidad y de desplazamiento forzado o abandono de tierras que se ha evidenciado a lo largo de la historia de Colombia, presenta un común denominador que no es otro diferente a aquel que se circunscribe a la existencia de un factor discriminatorio, asociado al género, la edad, o la pertenencia a un grupo minoritario¹¹, por tal razón, debe ser un aspecto de relevante consideración en la etapa administrativa y posteriormente en la judicial de los procesos de Restitución de Tierras despojadas o Abandonadas Forzosamente, pues merecen un especial tratamiento que se ha decantado como lo han hecho los entes constitucionales y los instrumentos internacionales de protección en el marco legal estableciendo en el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, lo cual se traduce en la obligación legal no solamente en la atención a la víctima, sino que además, en lo que concierne a la intervención oficial para asegurar que éste grupo de personas medien de manera directa en la sustanciación de los casos, en el litigio de los mismos, en las decisiones judiciales y en la etapa posterior a ellas.

Es así como en desarrollo de ésta política de justicia transicional se expidió el Decreto 4829 de 2011 para incluir los componentes viabilizadores de la real ejecución del principio de discriminación positiva dentro del marco de la actuación administrativa del proceso de restitución de tierras, mismo que debe ser observado en la fase judicial como en las posteriores actuaciones de garantía del goce estable de los derechos reconocidos en la conclusión del trámite integral (Fase administrativa y judicial), en todo caso, procurados desde una óptica adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva.

El hecho de procurar la mejor atención a las víctimas que se enmarquen dentro una situación especial y diferenciada del resto social, busca materializar la mayor atención a la población desplazada que actualmente se sujeta a un estado de mayor vulnerabilidad, para efectos de dignificarlas en el reconocimiento de sus derechos, superando de esa manera, el estado de cosas inconstitucional advertido en la sentencia T 025 de 2004.

Reserva Forestal de la Amazonía y sustracción de áreas objeto de restitución.

Debido a la afectación que presenta el predio bajo estudio por la Reserva Forestal de la Amazonía constituida con la Ley 2^{da} de 1959, es de suma importancia traer a colación el objetivo e implicaciones de la norma, siendo que con ella se dictan normas sobre economía forestal de la

¹¹ Afrodescendientes, comunidades indígenas, población Rom o Gitanos

Nación y conservación de recursos naturales renovables, y más concretamente, en el artículo 1 especifica su objetivo primordial, el cual reza,

Artículo 1. Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se establecen con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés General", según la clasificación de que trata el Decreto legislativo número 2278 de 1953, las siguientes zonas de reserva forestal, comprendidas dentro de los límites que para cada bosque nacional se fijan a continuación:

Y en el literal G del mismo artículo, se desarrolla los límites de las zonas afectadas con la reserva forestal protegidas por la norma, respecto a la zona de la Amazonía donde se encuentra ubicado el predio a restituir, siendo los enunciados a continuación,

g) Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, comprendida dentro de los siguientes límites generales: Partiendo de Santa Rosa de Sucumbíos, en la frontera con el Ecuador, rumbo Noreste, hasta el cerro más alto de los Picos de la Fragua; de allí siguiendo una línea, 20 kilómetros al Oeste de la Cordillera Oriental hasta el Alto de Las Oseras; de allí en línea recta, por su distancia más corta, al Río Ariari, y por éste hasta su confluencia con el Río Guayabero o el Guaviare, por el cual se sigue aguas abajo hasta su desembocadura en el Orinoco; luego se sigue la frontera con Venezuela y el Brasil, hasta encontrar el Río Amazonas, siguiendo la frontera Sur del país, hasta el punto de partida.

Sin embargo, conforme a la solicitud elevada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas –UAEGRTD- ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que pretendía la sustracción definitiva de un área localizada dentro de la reserva Forestal de la Amazonía establecida en la Ley 2 de 1959 y que hace parte del área microfocalizada geográficamente mediante la resolución No. REM 003 del 31 de agosto de 2012, para la restitución jurídica y material de tierras, este último expidió la Resolución No. 1517 de 14 de septiembre de 2016 con tal fin, y entre las áreas sustraídas están las localizadas en jurisdicción de las veredas El Placer, Los Ángeles, Mundo Nuevo y la Esmeralda del municipio de Valle del Guamúez, departamento del Putumayo.

5.4. Lo Probado:

De conformidad con el acervo que obra en el expediente, encontramos, los siguientes hechos probados:

Hechos de violencia: De acuerdo con el estudio de Contextualización General del municipio del Valle del Guamúez que nos aporta la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en su solicitud de restitución, las conclusiones tomadas del punto quinto de la misma, son el resultado de un análisis fáctico, temporal y espacial en los que encajan perfectamente los hechos descritos en el acápite correspondiente. Resultan claros y notorios estos hechos que referencia quien representa al solicitante, toda vez que reseña hechos históricos verídicos en nuestro país fundamentado en fuentes de información disponibles en entidades, páginas web y testimonios.¹²

Básicamente se explica el hecho de surgimiento de grupos armados al margen de la Ley con la ausencia de la presencia estatal en las zonas afectadas, lo que hizo que proliferara la explotación agrícola de la planta de coca por parte de la guerrilla (FARC), situación que transforma las dinámicas culturales, sociales, políticas y económicas de las personas, luego con las olas de invasión paramilitar con la que se había tenido cierto pacto de no agresión y las fumigaciones a

¹² Folios 8 a 92

cultivos, que afectaron también a aquellos cultivos lícitos, se elevaron las condiciones para que se generaran más desplazamientos y hechos victimizantes en la zona.

Posteriormente, se da inicio al periodo de influencia de los grupos paramilitares con la entrada en la Inspección del Placer el 7 de noviembre de 1999 de las Autodefensas Unidas de Colombia, día en el cual cometen contra la población una de las masacres más impactantes de la historia en este departamento, con la incursión del Bloque Sur Putumayo, dando inicio a un periodo de violencia y amedrentamiento contra esa población.

A partir de 2015 interviene el Estado para dar un viraje a esta situación de conflicto que por años ha azotado a estas veredas, a partir de estrategias como el plan Retorno lideradas, entre otras, por el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a víctimas SNARIV.

Dado que estos hechos, como quedó anotado concuerdan en espacios de tiempo lugar y condiciones resulta probada en consecuencia, la veracidad de los hechos violentos que narra la señora Maria Florentina Burbano Chingana en su solicitud, así como también el hecho del desplazamiento forzado del predio del cual es ocupante desde el año 1995.

Condición de Víctima de la señora Maria Florentina Burbano Chicangana: Desarrollando el concepto de víctima que establece la Ley 1448 de 2011 en su artículo tercero y los criterios jurisprudenciales a tener en cuenta a fin de entrar a determinar quién puede ser considerado víctima del conflicto armado colombiano, encontramos que en sentencia T-054 de 2017 se reiteran las posiciones esbozadas por el máximo órgano constitucional al respecto:

5. La noción de víctima de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado colombiano. Reiteración de jurisprudencia

En el ordenamiento interno colombiano, existe un importante marco normativo que ha sido reiteradamente reconocido por esta Corporación.¹³ Desde el año 1993, con el artículo 1º del Decreto 444, se reconoció la calidad de víctima a aquellas personas que hubieran sufrido perjuicios indirectos como consecuencia de atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos que afecten a la población civil. Posteriormente, se amplió el concepto incluyendo a la población afectada como consecuencia de tomas guerrilleras¹⁴, a las que sufrieran por combates y masacres indiscriminadas por motivos ideológicos o políticos¹⁵ y, con el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, se incluyó a la población civil que sufriera perjuicios en su vida, integridad personal o bienes, como consecuencia de actos relacionados con el marco del conflicto armado interno, atentados terroristas, combates, ataques y masacres.

(...).

En tratándose de las normas internas que han sido expedidas por el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, de manera prevalente debe mencionarse la Ley 1448 de 2011 y sus decretos con fuerza de ley creados para satisfacer los derechos de los grupos étnicos. La Ley 1448, comúnmente reconocida como “Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”, busca restablecer el proyecto de vida de cada víctima del conflicto armado interno, así como garantizar el goce efectivo de sus derechos de manera sostenible y transformadora.

La Ley 1448 de 2011, se enmarcó dentro del campo de la justicia transicional y tiene como propósito definir acciones concretas para garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

En relación con el concepto de víctima, el artículo 3º de dicha ley estableció lo siguiente:

“aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado

¹³ Corte Constitucional, Sentencia T-364 de 2015.

¹⁴ Artículo 18 de la Ley 104 de 1993.

¹⁵ Artículo 10 de la ley 241 de 1995.

interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima". (negrillas del despacho)

De conformidad con el citado artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, el propio Estado no solo reconoció la existencia del conflicto armado interno en Colombia, sino también la configuración de violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH); en especial, el artículo 3º común a los Convenios y Protocolos de Ginebra.

Dentro de los aspectos tenidos en cuenta en el artículo 3º común a los Convenios y Protocolos de Ginebra, se encuentra el denominado principio de distinción, el cual genera a las partes el deber de diferenciar entre combatientes y no combatientes. Ninguna de las partes en conflicto puede involucrar a las personas que no tomen o hagan parte directamente de las hostilidades. Estas personas, por ese hecho, adquieren el estatus de personas protegidas.(Negrillas del despacho)

Así las cosas, cualquier afectación a los derechos de las personas protegidas en el marco del conflicto armado interno, es reconocida y está enmarcada en la Ley 1448 de 2011.

A partir de las sentencias C-253A de 2012 y C-781 del mismo año, esta Corporación ha entendido que en cuanto a la expresión consagrada en el artículo 3º referente a la noción de víctima "con ocasión al conflicto armado", dicho "conflicto armado" debe interpretarse de manera amplia, más allá de las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con exclusión de otros. (Negrillas del Despacho)

Esta Corte ha indicado que estos criterios interpretativos son obligatorios para los operadores jurídicos y "ante la ocurrencia de una afectación grave de derechos humanos o de una infracción de las normas del derecho humanitario, en caso de duda sobre si tal hecho ha ocurrido en el marco del conflicto armado interno, debe darse prevalencia a la interpretación en favor de la víctima".

En el asunto que nos ocupa, la consulta individual en el aplicativo VIVANTO¹⁶ certificó que la señora Maria Florentina Burbano junto con su núcleo familiar se encuentran incluidos en la base de datos desde junio del año 2005, información que igualmente se pudo corroborar con las declaraciones contempladas en la solicitud de inscripción en el Registro de tierras Despojadas y Abandonadas¹⁷, la diligencia de ampliación de declaración de la UAEGRTD¹⁸, y de las manifestaciones contenidas en los testimonios rendidos por los señores Aleida Patricia Morales Salas y Yury Melania Chacua Pinchao¹⁹, lo cual permite concluir que la información brindada por la solicitante es fidedigna, y corresponde con los hechos relatados en la acción de restitución.

De los documentos arrojados con la solicitud por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -los cuales se consideran fidedignos- y del material recaudado por este Despacho en el transcurso de esta etapa judicial, y que ha sido objeto de análisis en esta sentencia, se tiene que la señora Maria Florentina Burbano Chingana, es víctima del conflicto armado interno del país, de conformidad a los límites temporales establecidos por la ley 1448 de 2011 -esto es entre el año 2003 y el término de vigencia de la ley-, calidad que viene plenamente probada en el proceso, según análisis previo hecho por este Despacho y de las pruebas recaudadas, se puede concluir que la solicitante, abandono de manera forzada el predio que ocupaba, donde vivía y donde ejercía su actividad comercial y de ama de casa, la cual le servía de sustento de las necesidades básicas y como fuente de ingresos.

¹⁶ Folio 54

¹⁷ Folios 59 a 61

¹⁸ Folios 55 a 58

¹⁹ Folios 66 a 69

224

Identificación y determinación del predio objeto de Solicitud:

Respecto de los datos consignados en el acápite de los hechos de la demanda, se tienen como correctos y ciertos, ya que el bien objeto de restitución y/o formalización, reconocido catastralmente con No. 86-865-00-02-0001-0630-000 se encuentra debidamente identificado e individualizado, pues corresponde al descrito por el solicitante, y del cual no poseen el dominio por tratarse de un bien baldío y por tanto la propietaria es la Nación, según información que reposa en el Informe Técnico Predial²⁰.

Relación Jurídica o calidad de Ocupante que ostenta la solicitante respecto al predio:

Tomado como presupuesto de la acción, y los requisitos que se debe cumplir para ser sujeto de adjudicación de baldíos por parte de la Agencia Nacional de Tierras, toda vez que dicha entidad hace referencia a la explotación económica de predios que son de la Nación, que no están excluidos por ley de una relación de propiedad, por un tiempo determinado, con el ánimo de señor y dueño, con un área igual o inferior a la denominada Unidad Agrícola Familiar –UAF-²¹.

En el caso que nos ocupa, la relación jurídica de la solicitante con el predio es la de OCUPANTE, toda vez que en un primer momento lo adquirió mediante contrato verbal con el señor Sigifredo Pantoja en el año de 1995 y posteriormente en el año 2008 a través de documento formal de compraventa acuerdan la venta del predio, sin embargo nunca se protocolizo ni se elevó a escritura pública, ostentando claramente una relación jurídica como ocupante.

En este punto del análisis se hace necesario referirse a la contestación de la demanda allegada por el INCOCER –hoy Agencia Nacional de Tierras-, la cual fue extemporánea, donde con escrito de 13 de julio de 2017²², manifestando que en su base de datos no se reportan procedimientos administrativos asociados al predios solicitado en restitución, sin que presente oposición alguna por tratarse de un bien baldío, tal situación debe ser valorada, confrontada y objetivizada frente a las pruebas aportadas y realizadas en el curso del proceso, remitiéndose al buen criterio y apreciación del Juez.

5.5. Caso Concreto:

Decantado lo anterior pasamos a analizar si de todo lo probado, se concluye finalmente el reconocimiento de los derechos invocados con la solicitud, teniendo en cuenta que la pretensión principal de restitución lleva inmersa la declaratoria de pertenencia del mismo, habida cuenta la calidad de Ocupante que ostenta la solicitante respecto del predio objeto de la solicitud de Restitución.

Comenzaremos tomando en cuenta el análisis reciente y reiterativo realizado por nuestro máximo órgano constitucional que lo resume así²³:

BIENES BALDIOS-Evolución del régimen legal

En algunos períodos el régimen jurídico de los baldíos se ha aproximado más al modelo del dominio eminente y de la res nullius. Sin embargo, al margen de los cambios en los objetivos políticos buscados con el régimen de baldíos en cada momento histórico, desde la conquista el régimen jurídico ha preservado ininterrumpidamente la propiedad estatal sobre estos bienes, a los que hoy clasifica como bienes fiscales adjudicables. Por otra parte, se puede concluir que a partir de la Ley 200 de 1936, y aún más claramente con la Ley 135 de 1961, se ha ido configurando la autonomía del derecho agrario frente a las normas generales

²⁰ Folio 74 - 79

²¹ Para el municipio de Valle del Guamúz (P), la UAF es de 70 a 90 has, según Resolución No. 041 de 1996.

²² Folios 163

²³ Corte Constitucional, Sentencia SU/235/16 .

del derecho civil. Dentro de esta autonomía cobra especial importancia el papel cada vez mayor que se le otorga al Estado para dirigir la reforma agraria, y en especial, el valor jurídico que se le da a los títulos de adjudicación de baldíos. Ante el silencio legal, la jurisprudencia, manteniendo una visión más tradicionalista, afirmó que los actos administrativos inicialmente no eran títulos, sino simples "actos declarativos de propiedad", mientras que con posterioridad a la Ley 135 de 1961 fueron expresamente considerados como títulos declarativos de la propiedad adquirida mediante la ocupación, y ya con la Ley 160 de 1994, los llamados títulos "traslaticios del dominio", por medio de los cuales el Estado transfiere la propiedad.

BIENES BALDIOS-Naturaleza y finalidad

La jurisprudencia de esta Corporación, siguiendo la doctrina y la jurisprudencia pacífica, ha clasificado los bienes baldíos como un tipo especial de bienes, los bienes fiscales adjudicables. Son bienes fiscales adjudicables aquellos bienes públicos que no están a disposición de la población en general. Es decir, no son de uso público sino bienes fiscales, lo cual significa que no cualquier persona tiene derecho a usarlos, sino que tienen vocación de uso exclusivo por parte de entidades del Estado, para la prestación de servicios públicos, o para ser adjudicados.

ADJUDICACION DE BIENES BALDIOS-Potenciales beneficiarios

Sólo pueden acceder a los baldíos las personas que no sean propietarias de otros bienes rurales, y cuyo patrimonio se encuentre por debajo de determinado tope máximo. Así mismo, es posible que el Gobierno les dé prioridad en el acceso a los baldíos a ciertos sectores especialmente vulnerables de la sociedad, a través de programas específicos. Es así como el Gobierno ha diseñado programas dirigidos especialmente a las víctimas del conflicto armado, o de desastres naturales, y a las mujeres cabeza de hogar, según la facultad establecida en la misma Ley 160 de 1994.

Por encontrarnos frente a una solicitud de restitución y/o formalización de terrenos baldíos, producto de un despojo y/o desplazamiento forzado, deberemos enmarcarnos en la Ley civil Vigente, esto es Ley 160 de 1994 con la finalidad de poder establecer el cumplimiento de los requisitos o condiciones sine qua non aterrizados al caso concreto.

Es sabido que, de conformidad con la normatividad vigente la manera de adquirir Terrenos o predios baldíos adjudicables es mediante la obtención de título traslativo de dominio otorgado por el ente estatal a través del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, hoy Agencia Nacional de Tierras ANT, debe mediar ocupación previa del predio, en tierras de aptitud agropecuaria que se estén explotando en favor de las personas naturales, empresas comunitarias y cooperativas campesinas en las extensiones y condiciones que para cada municipio o región del país señale la junta directiva²⁴.

Quien pretenda la adjudicación de un baldío, deberá demostrar que tiene bajo explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita y que la explotación adelantada corresponde a la aptitud del suelo, así mismo deberá acreditarse una ocupación y explotación previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación. La ocupación anterior de persona distinta del peticionario.

No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional. Así mismo, en el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011 se preceptuó que si el despojo o el desplazamiento perturbó la explotación económica del baldío, no se tendrá en cuenta la duración de dicha explotación, además, se advierte que debe acogerse como criterio el que La Unidad Agrícola Familiar sea la extensión máxima a titular, siendo ineficaz cualquier adjudicación que la exceda.

Es menester resaltar que tras haberse requerido a la Agencia Nacional de Tierras –ANT- en el auto que decreta pruebas, de si la solicitante cumple o no con los presupuestos de la ley 160 de 1994 para la adjudicación del bien baldío, la entidad contestó fuera de término y sin resolver el

²⁴ Artículo 65 Ley 160 de 1994

225

requerimiento²⁵, razón por la cual tal pronunciamiento no fue valorado por el Juez de conocimiento, y a su vez dicha conducta permite deducir para esta Judicatura que no existe oposición alguna por frente a la adjudicación, como también lo ha dejado entrever desde la contestación de demanda.

Sin embargo, según la Ley 160 de 1994 junto con su Decreto Reglamentario 2664 de 1994, se vislumbra que la solicitante y su núcleo familiar para el momento de los hechos, cumplen los requisitos exigidos por la norma, pues se trata de personas campesinas, de escasos recursos²⁶, que para la época de los hechos no eran propietarios de otras tierras, que se dedicaban a la actividad agrícola, pues el terreno se destinó para construir una casa pequeña de madera y para las labores del campo donde trabajaban con cultivos de de pastos, chiro y plátano, todo lo anterior sumado a la calidad de víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, que también se encuentra probado, que se vivió en esa zona veredal de Valle del Guamuéz (P) y de la cual fueron objeto la solicitante y su núcleo familiar.

Además, la señora Burbano Chicangana habitaba y explotaba el referido predio con ánimo de señora y dueña antes del desplazamiento, según las declaraciones y testimonios aportados en la demanda²⁷, mismas que dan certeza al despacho de lo referido, en virtud a que justifican sus razones.

Teniendo en cuenta que se encuentra probado el desplazamiento forzado y consecuente abandono por varios años, acarrea en consecuencia concluir que sí se ha presentado una perturbación a la explotación del predio, y que de cara a lo preceptuado en el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, implica que este requisito del tiempo, no es exigible en el presente caso.

En cuanto a las restricciones de las áreas de interés nacional correspondiente a los parques naturales, páramos, resguardos indígenas y afro descendientes, zonas de explotación de hidrocarburos y áreas de interés minero-energético, según información aportada por la UAEGRTD, el predio materia del proceso no está contenido en dichas zonas de afectación.

En lo que atañe al área del predio que aquí se pretende restituir y/o formalizar, no excede el área establecida por el gobierno nacional (70 a 90 hectáreas), si tenemos en cuenta que el predio tiene una extensión de (4Has + 4007M²)²⁸.

Frente al límite patrimonial que deben detentar las personas que solicitan la adjudicación de predios baldíos es menester decir, que ello se prueba a través de las declaraciones del impuesto sobre la renta que cada año gravable están obligados a presentar ciertas personas naturales y jurídicas, encontrando que la entidad competente en este caso la DIAN, sin embargo en el caso bajo estudio, se ofició a la entidad con tal fin pero no se obtuvo respuesta alguna, lo cual nos permite analizar esta situación a partir del principio de buena fe²⁹ contemplado en el artículo 5 y de la inversión de la carga de la prueba del artículo 78³⁰ de la ley 1448 de 2011, para deducir que

²⁵ Folio 163

²⁶ Informe de Caracterización Grupo Familiar realizado por la Secretaria de Salud Municipal – Municipio de Mocoa (folios 210 a 215, cuaderno principal)

²⁷ Folios 102 - 107

²⁸ Para el municipio de Valle de Guamuéz (P), la UAF es de 70 a 90 has, según Resolución No. 041 de 1996.

²⁹ PRINCIPIO DE BUENA FE. El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba.

En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas.

En los procesos judiciales de restitución de tierras, la carga de la prueba se regulará por lo dispuesto en el artículo 78 de la presente Ley.

³⁰ INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. Bastará con la prueba sumaria de la propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se opongan a la pretensión de la víctima en el curso del proceso de restitución, salvo que estos también hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio.

debió ser el INCODER, ahora Agencia Nacional de Tierras quien debió desvirtuar que la solicitante ostentaba una capacidad económica superior al límite establecido por la norma, no obstante dicha entidad no se pronunció al respecto, de otro lado, en el requerimiento hecho con el decreto de pruebas, donde se le preguntaba específicamente de si la solicitante cumplía o no con los presupuestos de la ley 160 de 1994 para la adjudicación del bien baldío, se mantuvo en silencio, además de lo probado se llega sin mayores esfuerzos a la conclusión, tal como quedó dicho arriba, que la señora Maria Florentina Burbano Chicangana es una persona de escasos recursos económicos.

Se advierte que en este pronunciamiento se declarará el derecho que tiene la solicitante y su núcleo familiar a que se le tenga en cuenta y priorice, dentro de los diversos componentes que estructuran el mismo³¹ y frente a todas aquellas políticas implementadas por el Estado para garantizar los derechos que tienen las víctimas del conflicto armado interno, siempre y cuando, se dé el retorno y/o el inicio o continuación de explotación económica del predio.

El predio rural ubicado en departamento del Putumayo, municipio de Valle del Guamuéz, inspección del Placer, vereda Los Ángeles identificado con cedula predial No. 86-865-00-02-0001-0630-000, un territorio afectado por los hechos de violencia descritos y recopilados en el informe de contexto allegado al expediente, pues la solicitante, vivía y trabajaba en el bien inmueble objeto del proceso que nos ocupa; el predio abandonado fue incluido en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas mediante acto administrativo RP 0206 de 20 de octubre 2014 y que luego de un juicioso trabajo de campo, social, catastral y administrativo, se confirmó que la solicitante en calidad de OCUPANTE tiene todos los derechos según las políticas de la ley 1448 de 2011, es decir, derecho a que se le restituya y/o titule el goce efectivo y el uso de la tierras.

Aunado a lo anterior, tenemos que la señora MARIA FLORENTINA BURBANO, según sus declaraciones vertidas en la ampliación de declaración de testimonio, en el formulario de solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y en los informes de caracterización tanto de la UAEGRT³² como también de la Secretaria de Salud del Municipio de Mocoa³³, arimados en la demanda, manifestó su voluntad inequívoca de no retornar al predio objeto de solicitud, debido a que siente mucho temor y angustia a que puedan volver atentar contra ella y su núcleo familiar, pues del hecho acaecido en el que su esposo resulto siendo una víctima mortal de grupos al margen de la ley como consecuencia de la violencia indiscriminada que azotaba la zona donde vivía, aún quedan en ellos las secuelas del dolor y temor que tuvieron que padecer, más aun si se tiene en cuenta que sus vecinos le han puesto en su conocimiento que tanto su vida como la de sus hijos corre peligro si regresa a su predio, sumado a ello se puede observar sus condiciones de salud, económicas y de mujer cabeza de familia, pues revisando dichos informes de caracterización³⁴, encontramos que efectivamente la señora solicitante es una mujer de extracción campesina, cabeza de familia, viuda y sus condiciones de salud se han visto quebrantadas debido a una agresión física por parte de un hijastro que le dejo secuelas en la memoria pues no logra retener información a largo plazo y también tiene una discapacidad en su mano izquierda, encontrándose en una situación de debilidad manifiesta y convirtiéndose en un sujeto de especial atención y protección extendiéndosele a ella en su integridad los efectos y la aplicación del enfoque diferencial por parte del estado; al mismo tiempo menciona que el predio objeto de debate en este asunto se encuentra completamente destruido debido a los enfrentamientos de los grupos al margen de la ley, esto constituyen los fundamentos para que sea posible afirmar inequívocamente

³¹ 1. Salud 2. Alimentación 3. Educación 4. Identificación 5. Reunificación familiar 6. Orientación ocupacional 7. Vivienda 8. Atención psicosocial 9. Tierras 10. Servicios públicos básicos 11. Vías y comunicaciones 12. Seguridad alimentaria 13. Ingresos y trabajos 14. Organización social.

³² Folios 177 a 178

³³ Folios 210 a 215

³⁴ Folio 177 a 178

que no están dadas las condiciones para la restitución material del predio reclamado, y de obligárseles a retornar.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que la señora MARIA FLORENTINA BURBANO cumple el presupuesto legal establecido en el literal C del artículo 97 de la ley 1448 de 2011, toda vez que la restitución a dicho predio no representaría beneficio alguno para la salud e integridad de ella y núcleo familiar, sino que por el contrario, desmejorarían en gran medida las condiciones que de por sí son bastante precarias en la actualidad en el entendido que no existe ni si quiera una casa de habitación en dicho predio como ya se mencionó, que impiden una digna y congrua subsistencia en ese predio por lo que en consecuencia se declarará la procedencia de la restitución por equivalencia económica, es decir, se ordenará con cargo a los recursos de la UAEGRTD se entregue a la solicitante y su actual núcleo familiar, un bien inmueble de similares o mejores características donde puedan vivir dignamente.

Así las cosas, mal haría la Judicatura en ordenar un retorno que no será efectivo para el goce de los derechos de las víctimas y que sobre todo no estaría resarciendo el daño sufrido sino revictimizarlos, cuando la solicitante ha insistido en la reubicación de su predio por afectación a la integridad personal de ella y su familia, y como lo pretendido por la ley de restitución de tierras es resarcir todo ese daño a las víctimas del conflicto armado interno, procurando repararlas en sus derechos íntegramente.

5.1. Conclusiones:

Para enmarcar mejor la justificación y sentido de las decisiones que a continuación se condensan considera menester el despacho citar y acoger los nuevos y más recientes raseros esbozados por Nuestra Corte Constitucional en la ya mencionada sentencia T-054 de 2017:

*Esta Corporación ha consagrado que el derecho a la reparación integral es un derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado, porque: "1) busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no repetición"*³⁵.

*(...) El derecho a la reparación integral, a su vez, implica la obligación del Estado de adoptar "todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación"*³⁶. (negrillas del despacho)

(...) La Ley 1448 de 2011 se expidió para ser una ley de reparación integral. Es decir, más allá de que los victimarios hayan sido agentes estatales o miembros de grupos armados al margen de la ley, el Estado asumió el deber de reparar por la vía administrativa; es decir, de manera más expedita y eliminando la carga de la prueba en cabeza de las víctimas.

*De trascendental importancia para el contexto colombiano, es la consagración del principio denominado "enfoque transformador" en el marco del Decreto 4800 de 2011 (Art. 5º). Este busca eliminar los esquemas de discriminación y marginación de las víctimas del conflicto armado, evitando la repetición de los hechos. Es decir, en Colombia no solo se pretende reparar a las víctimas de manera integral con las cinco medidas ya mencionadas, sino también evitar que aquellas vuelvan a su situación previa de precariedad material y de discriminación*³⁷. *El enfoque transformador busca, precisamente, transformar esas circunstancias, pues la exclusión es un factor generador del conflicto armado. (Negrillas del despacho)*

³⁵ Corte Constitucional, Sentencia C-753 de 2013.

³⁶ Corte Constitucional, Sentencia C-454 de 2006.

³⁷ Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011, Informe al Congreso de la República 2013.

Frente a las pretensiones principales enunciadas en los numerales del primero al décimo se declararán, exceptuando los numerales 11 que no aplican en el caso que nos ocupa por no darse los supuestos que las fundan, advirtiendo que en el caso que varíen o persistan las condiciones, podría modificarse esta decisión, las pretensiones complementarias, las pretensiones especiales con enfoque diferencial y subsidiarias se conceden en atención a lo arriba expuesto, como también las solicitudes especiales no se concederán, como quiera es un acto procesal que se efectuó durante el transcurso del proceso.

No obstante ello, se reserva el despacho la facultad de modular la presente decisión si en condiciones futuras se llegare a determinar que resulta necesario con el fin de garantizar el resarcimiento perseguido con el cumplimiento de las órdenes dictadas.

En relación a las órdenes que aquí se impartan debe tenerse en cuenta que el núcleo familiar al momento de su desplazamiento se encontraba compuesto por sus hijos Yeni Paola, Edwin Alexander, Jeimer Alejandro, Wilmar Ivan, Luis Alberto Quenguan Burbano que son personas de extracción campesina, y que son beneficiarios de la sentencia favorable a su solicitud de Restitución De Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente.

Finalmente en cuanto a la verificación de planes existentes, se tiene que por disposición de la Ley 1448 de 2011 y teniendo en cuenta los planes de Retorno y/o Reubicación, que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de este municipio, dispuso llevar a cabo la audiencia de seguimiento post fallo dentro del proceso de Restitución de Tierras No. 2012 – 00098, y de ella se concluyó, que en primer término, el municipio de Valle del Guamúz cuenta con un plan Retorno plenamente actualizado, esto es, el aprobado por el Comité de Justicia Transicional municipal el pasado 14 de diciembre del 2015, el cual debe ser ejecutado y desarrollado de manera eficaz en favor de dicha comunidad.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero de Descongestión Civil Del Circuito, Especializado en Restitución de Tierras, de Mocoa, Putumayo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR, RECONOCER y PROTEGER a la señora Maria Florentina Burbano Chicacangana, identificada con C.C. No. 41.108.234 expedida en Orito (P), en su derecho fundamental a la Restitución y/o Formalización, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, en consecuencia la Agencia Nacional de Tierras, a través de su director general MIGUEL SAMPER STROUSS o a quien haga sus veces al momento de la comunicación de esta orden, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, **ADJUDICARÁ** en favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, el predio Rural objeto de restitución ubicado en la vereda Los Ángeles, municipio Valle del Guamúz, Departamento del Putumayo.

SEGUNDO: ORDENAR al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, realice la **RESTITUCIÓN POR EQUIVALENCIA**, la cual deberá llevarse a cabo en un lapso no superior a tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, teniendo en cuenta el correspondiente avalúo comercial realizado por el IGAC, el cual será requerido con la notificación de la presente providencia para que se remita copia a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, previo análisis y concertación con los beneficiarios de la restitución aquí declarada, les **TITULE Y ENTREGUE**, un predio ubicado en el actual domicilio de la solicitante en similares o mejores características al predio identificado e individualizado en el numeral 1.1 de esta providencia, conforme a lo

227

establecido en la Ley 1448 de 2011 y Decreto 4829 de la misma anualidad, de lo cual deberá rendir el informe respectivo a esta judicatura.

Para dar cumplimiento a lo anterior, dicho Fondo deberá aplicar la opción legal más favorable para la solicitante y su grupo familiar, respetando el orden establecido en la citada norma, y teniendo en cuenta que en la actualidad ese grupo familiar se encuentra viviendo en la ciudad de Mocoa en el Barrio Palermo.

Advertir al Fondo de la UAEGRTD, Nivel Central, que el bien inmueble objeto de compensación que les sea entregado a la señora Maria Florentina Burbano, deberá encontrarse libre de cualquier clase de gravamen, a excepción la medida de protección estipulada en el artículo 101 de la Ley de víctimas.

TERCERO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que en asocio con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas coordine y lleve a cabo la entrega material del predio compensado, la cual se hará de manera simbólica, entregándole a la solicitante copia del presente fallo explicando su sentido y alcance, dejando la respectiva constancia, en el lugar donde actualmente se encuentra su residencia, ello dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia.

CUARTO: ORDENAR a la señora Registradora de Instrumentos Públicos de Puerto Asís (P.), registrar a nombre del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, el predio Rural objeto de restitución ubicado en la vereda los Angeles, municipio Valle del Guamúz, Departamento del Putumayo, el que se individualiza de la siguiente manera:

Matricula Inmobiliaria	Código Catastral	Área Solicitada	Área a Restituir
442-71158	86-865-00-02-0001-0630-000	5 has	4Has + 4007M ²
COORDENADAS DEL PREDIO			
PUNTO_ID	LATITUD	LONGITUD	
75188	0° 28' 31,201" N	77° 0' 33,010" W	
75189	0° 28' 29,607" N	77° 0' 32,628" W	
75190	0° 28' 28,686" N	77° 0' 29,711" W	
75191	0° 28' 26,770" N	77° 0' 30,957" W	
75192	0° 28' 25,492" N	77° 0' 27,637" W	
75193	0° 28' 21,970" N	77° 0' 29,381" W	
75194	0° 28' 23,340" N	77° 0' 34,250" W	
75195	0° 28' 24,969" N	77° 0' 37,874" W	
LINDEROS Y COLINDANCIAS			
NORTE	Partiendo desde el punto 75188 en dirección oriente, pasando por los puntos 75189, 75190, 75191 en una distancia de 325,54mts, hasta llegar al punto 75192 con predios del señor ENRIQUE MALES.		
ORIENTE	Partiendo desde el punto 75192 en línea recta en dirección sur, en una distancia de 121,03 mts, hasta llegar al punto 75193 con predios de la señora ROSA AMALIA CHAVEZ.		
SUR	Partiendo desde el punto 75193 en dirección occidente, pasando por el punto 75194 en una distancia de 279.41 mts, hasta llegar al punto 75195 con predios de la señora TABITA ELSA PINCHAO.		
OCCIDENTE	Partiendo desde el punto 75195 en línea recta en dirección norte, en una distancia de 243,73mts, hasta llegar al punto 75188 con predios de CAMINO REAL AL GUISIA.		

QUINTO: ORDENAR a la señora Registradora de Instrumentos Públicos de Puerto Asís (P.), lo siguiente:

- La inscripción de esta Sentencia en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 442-71158.
- Igualmente, se ordena el levantamiento de las medidas cautelares de inscripción de la demanda y de la orden de sustracción provisional del comercio del bien perteneciente al Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 442-71158, proferida al momento de dar inicio a este trámite judicial.
- Dichas órdenes deberán hacerse efectivas dentro de los términos dados por la Superintendencia de Notariado y Registro, pero, los mismos sólo iniciaran a contar una vez allegada por la Agencia Nacional de Tierras la respectiva resolución de adjudicación.
- Además, esa misma funcionaria deberá hacer llegar a este Despacho y al IGAC el Certificado de Libertad y Tradición del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 442-71158, en el término de cinco (05) días contados a partir de las referidas inscripciones.
- Disponer como medida de protección, la restricción establecida en el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011, consistente en la prohibición para enajenar el bien inmueble restituido durante el término de dos (2) años, siguientes a la expedición de esta sentencia, sin menoscabo de las prohibiciones de que trata la Ley 160 de 1994. Por Secretaría líbrese comunicación a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Asís, Putumayo, para que la inscriba en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo.

SEXTO: ORDENAR al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que dentro del término perentorio de un (1) mes, contado a partir del recibo de la calificación de la sentencia en el respectivo Folio de Matrícula Inmobiliaria, proceda a la actualización de sus registros cartográficos y alfanuméricos, atendiendo los criterios de individualización del predio reconocido en este fallo, debiendo **DESENGLOBAR** del predio de Cédula Catastral No. 86-865-00-02-0001-0630-000, el bien que le ha sido reconocido a la reclamante y del cual se ordena restituir a su favor (4Has 4007m²), debiendo rendir informe a este Despacho una vez se cumpla dicha tarea.

SEPTIMO: REITERAR la orden dada a la Unidad Administrativa Especial para la Atención Integral y Reparación a las Víctimas y a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, del orden nacional y territorial, en la sentencia número 246 del 19 de noviembre de 2013 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa (P) dentro del expediente 2013-00070-00, frente a la ejecución del plan de retorno, el cual se encuentra actualizado a partir de 14 de diciembre del año 2015 para el municipio de Valle del Guamúz, Putumayo, siguiendo los parámetros establecidos en la ley 1448 de 2011 y el decreto 4800 de 2011, bajo la coordinación de la Unidad de Víctimas.

Igualmente, deberá tener en cuenta respecto a las órdenes que aquí se impartan, que el núcleo familiar al momento del desplazamiento se encontraba compuesto por sus hijos Yeni Paola, Edwin Alexander, Jeimer Alejandro, Wilmar Ivan, Luis Alberto Quenguan Burbano, que son personas de extracción campesina, y que son beneficiarios de la sentencia favorable a su solicitud de Restitución De Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente.

La UARIV también tendrá que adelantar el proceso de *Verificación de Carencias*, al que se refiere el Decreto 1084 de 2015, a partir del Título 6 en su capítulo 5, a fin de determinar en qué etapa deberá ser atendido la restituida y su grupo familiar, estableciendo los criterios y procedimientos para la entrega de la atención humanitaria de emergencia o transición a las víctimas de desplazamiento forzado con base en la evaluación de los componentes de la subsistencia mínima o la superación de la situación de vulnerabilidad del hogar, para luego dar paso a la correspondiente indemnización por vía administrativa. No sobra advertir que este grupo familiar, y toda la población que ha sido beneficiada con los pronunciamientos de este despacho, deberán ser atendidos de manera prioritaria con respecto a la aplicación del decreto en mención, tanto en lo que tiene que

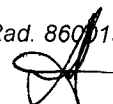


220

ver con la entrega de las ayudas humanitarias así como con el pago de las indemnizaciones por vía administrativa al ser víctimas del delito de desplazamiento forzado o de cualquier otro hecho delictivo generado por nuestro conflicto armado interno.

De igual manera, frente al actual Plan de Retorno para el municipio de Valle del Guamúz, el Despacho se atiene a lo manifestado en el auto número 344 del 08 de abril de 2014 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa (P), dentro del proceso radicado bajo el No. 2012-00098, el cual se entiende incorporado a esta sentencia, y atendiendo principalmente las siguientes ordenes en particular:

- El Departamento para la Prosperidad Social (DPS), según su oferta institucional, deberá poner en marcha la estrategia que busca implementar medidas de asistencia y acompañamiento a la población víctima del conflicto armado interno, y más concretamente, del delito de desplazamiento forzado, para que éstas puedan lograr su auto sostenimiento en pro de una estabilización socio-económica al interior de cada hogar.
- Igualmente, esta entidad, en asocio con el Ministerio de Cultura, deberá ejecutar proyectos de inversión social en infraestructura física al servicio de la comunidad (Centros de recreación, deporte y cultura), en el lugar donde se encuentra ubicado el predio inmerso en este proceso.
- En cada una de sus competencias, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio del Trabajo y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), tendrán que poner en marcha todos los programas de generación de empleo y su correspondiente capacitación, ello en favor del núcleo familiar de la solicitante, según lo dispone el título IV, capítulo I artículo 67 y 68 del Decreto 4800 de 2011.
- De igual manera se les deberá garantizar el acceso a la educación preescolar, básica, media, técnica y universitaria, concediendo incentivos y créditos de estudio para que puedan inscribirse a carreras técnicas, tecnológicas o universitarias relacionadas especialmente con el agro o a conveniencia del beneficiario, estando también involucradas para este fin, otras entidades tales como, el Ministerio de Educación, el ICETEX, y las Secretarías de Educación departamental y municipal.
- La UAEGRTD, deberá incluir por una sola vez a los beneficiarios de este pronunciamiento y a su grupo familiar, en el Programa de Proyectos Productivos a cargo de la dependencia que internamente maneja ese tema, esto luego de verificar que se realizó la entrega o el goce material del predio objeto de restitución, y además viendo la viabilidad del proyecto, y de acuerdo a lo establecido en la Guía Operativa que maneja ese programa.
- El Ministerio de Salud y Protección Social, las Secretarías de Salud del departamento y del municipio de Valle del Guamuez (P), junto con la EPS a la que se encuentre afiliada a la fecha, deberán garantizar de manera integral y prioritaria, a la solicitante en este asunto y a todo su grupo familiar, la cobertura en lo que respecta a la asistencia médica y psicológica, en los términos del artículo 52 de la Ley 1448 del 2011 y los artículos 91 y subsiguientes del Decreto 4800 de 2011.
- Además se implemente en el departamento del Putumayo, en coordinación de la UARIV, el programa de atención psicosocial y salud integral para las víctimas del conflicto armado (PAPSIVI) con el fin de mitigar la afectación emocional de esta población.
- Al Departamento del Putumayo y el municipio de Valle del Guamúz (P), les corresponde gestionar a nivel central los recursos necesarios para la recuperación y mantenimiento de las vías de acceso al lugar en el que se encuentra ubicado el predio ordenado aquí restituir.
- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tendrá que intervenir en la zona donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de este proceso, realizando el acompañamiento psicosocial a la familia que aquí ha sido beneficiada, determinando las diferentes necesidades de los menores de edad (niños, niñas y adolescentes) y que pueden aplicar en su favor según su oferta institucional, mediante los respectivos programas y proyectos, garantizando la atención



integral a esta población, para lo cual se remitirá el correspondiente oficio con la información de contacto correspondiente.

- El Banco Agrario de Colombia, dentro de los planes o programas de crédito en favor de la población desplazada, tendrá que ofrecer a la persona interesada en este asunto, teniendo en cuenta que se encuentra incluida dentro del Registro Único de Tierras Despojadas, la información completa en cuanto a cobertura y trámite para su consecución y desembolso, siempre que el mismo esté dirigido a una inversión agraria como proyecto productivo, y a iniciativa propia, si a ello hubiere lugar.
- El Banco Agrario de Colombia, los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, y de Agricultura y Desarrollo Rural, en asocio o de manera individual, deberán atender prioritariamente a la persona solicitante y su grupo familiar, dentro de los programas para adquirir subsidios de mejoramiento, construcción o compra de vivienda nueva o usada, y según su naturaleza, esto es, si es rural o urbano.
- Para lograr la materialización de este literal, la Unidad de Restitución de Tierras tendrá que remitir al Banco Agrario de Colombia, mediante el Acto Administrativo correspondiente, y de forma periódica, un listado de las personas que han sido beneficiadas con la Restitución de Predios y que tienen la necesidad de ser priorizadas en el tema de vivienda.
- Ordenar al Municipio de Valle del Guamúz, Putumayo, a través de su Alcalde Municipal y del Concejo Municipal, y a la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que desarrollen un *sistema de alivio y/o exoneración* de pasivos por concepto de impuestos municipales, servicios públicos, créditos e intereses bancarios, relacionados con el predio aquí restituido. De lo cual se presentará informe dentro de los dos meses siguientes al recibo de la comunicación.
- El Centro de Memoria Histórica deberá acatar de manera puntual los artículos 139, 147, 148 de la Ley 1448 de 2011, en la zona sobre la cual cobija esta decisión, y en lo que tiene que ver con las medidas de satisfacción y el recaudo de la información relativa a las violaciones de las que habla el artículo 3 ibídem.
- El Fondo de la Unidad de Tierras deberá aliviar las deudas que por concepto de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, tenga la interesada con las empresas prestadoras de los mismos y con las entidades financieras, en especial con el Banco Agrario, por créditos relacionados con el predio.
- El Comando de la Vigésima Séptima Brigada de Selva del Ejército Nacional, al igual que el Comando de Policía del Departamento del Putumayo, en ejercicio de su misión institucional y constitucional, tendrán que ejecutar los planes, estrategias, actividades y gestiones que sean necesarias para brindar la seguridad que se requiera a fin de garantizar la materialización de lo dispuesto en esta sentencia, lo cual debe hacer parte del Plan de Retorno coordinado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
- Todas las entidades involucradas en el cumplimiento de las ordenes aquí proferidas y expuestas en la Ley de Víctimas, relacionadas exclusivamente con la Restitución y/o formalización de Tierras en favor de la señora Maria Florentina Burbano, debiendo rendir ante este Despacho un informe pormenorizado cada tres (3) meses, de todas las actividades, gestiones y actuaciones tendientes a su acatamiento; ello a fin de poder mantener control y seguimiento, en lo que a post fallo se refiere y hasta tanto desaparezcan las causas que amenacen los derechos de la parte solicitante, según lo dispone el parágrafo primero del artículo 91 de dicha Ley.

OCTAVO: ACLARAR, que todas las entidades mencionadas en el numeral anterior, las cuales hacen parte del SNARIV, aparte del cumplimiento a las órdenes puntuales aquí impartidas, deberán asumir sus obligaciones adicionales, respecto de los diferentes convenios o acuerdos interinstitucionales, relacionados con el tema de la atención y reparación integral a las víctimas de las violaciones a las que se refiere el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, y particularmente a las que fueron beneficiadas con el presente pronunciamiento, ello en consonancia con el art. 26 ibídem.

229

NOVENO: NEGAR las demás pretensiones en atención a lo expuesto en la parte motiva del presente fallo.

DÉCIMO: NOTIFICAR este fallo al Representante legal del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, a la Procuraduría General de la Nación delegada para Restitución de Tierras y al representante judicial del solicitante, de conformidad con el artículo 93 de la ley 1448 de 2011, anexando copia de la misma.

Para dar cumplimiento a las órdenes aquí emanadas se remitirá copia virtual de esta providencia a las Direcciones Generales de las Unidades de Víctimas y de Tierras Despojadas, al Gobernador del Departamento del Putumayo, a CORPOAMAZONIA y a las entidades que pertenecen al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, a la Contraloría General de la República y a la Defensoría del Pueblo. Por secretaría, líbrense los oficios, las comisiones y las comunicaciones pertinentes. Se advierte que al no tener recursos la presente providencia, por ser este un proceso de única instancia, queda debidamente ejecutoriada al momento de ser proferida.

DECIMO TERCERO: SIN LUGAR a condena en costas por no haberse causado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ISBETH LILIANA RAMIREZ GOMEZ
Jueza